

Panorama de las infancias y adolescencias en clave regional

Niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección

RESUMEN



Institución Nacional
de Derechos Humanos
y Defensoría del Pueblo



APOYA

unicef 
para cada infancia



**Panorama de las
infancias y adolescencias
en mirada regional**
Niñas, niños y adolescentes
en el sistema de protección

RESUMEN

El Mecanismo Nacional de Prevención (MNP)¹ de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (IN- DDHH), con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), desarrolló un monitoreo para conocer el estado de situación de las niñas, niños y adolescentes que residen en los centros de protección especial del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La investigación dejó en evidencia que, desde una perspectiva comparada, en los últimos diez años no se ha contado con las debidas garantías de protección a las infancias y adolescencias separadas de sus referentes de cuidado.

Este trabajo sistematiza los hallazgos del monitoreo y pretende ser una herramienta para prevenir situaciones de vulneraciones de derechos e incidir en su erradicación.

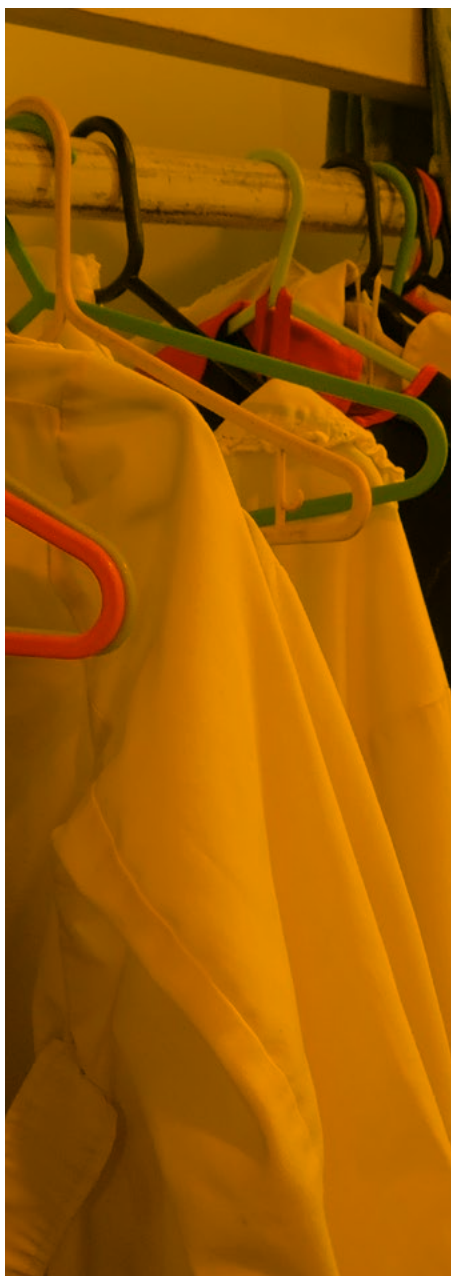
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MONITOREAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS?

Existe evidencia de que la institucionalización en centros del Estado expone a niñas, niños y adolescentes a posibles vulneraciones de sus derechos. Estas situaciones pueden agravarse, a su vez, según la etapa del desarrollo en la que se encuentren, así como debido a diversas condiciones (género, edad, raza, etc.), vulneraciones de derechos y violencias sufridas, que afectan el desarrollo integral. Por ello, es relevante contar con sistemas de monitoreo externo que colaboren con la protección de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados y contribuyan a prevenir y reparar vulneraciones de sus derechos.

El monitoreo permite asimismo identificar brechas entre la regulación y su efectivo cumplimiento en la práctica, tanto a nivel de calidad como de cobertura y servicios brindados. En este sentido, permite visualizar dificultades en la asignación de recursos materiales y humanos para el funcionamiento eficiente del sistema.

Por otra parte, el funcionamiento de mecanismos externos e independientes de monitoreo permite que las niñas, niños y adolescentes, así como sus referentes afectivos o familiares puedan realizar quejas, denuncias, consultas acerca del trabajo de las instituciones responsables y de posibles situaciones de vulneración de derechos.

¹ El *Mecanismo Nacional de Prevenciones* es el instrumento de alcance nacional creado a partir del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT). Es un organismo de control y de colaboración, de carácter autónomo e independiente de los poderes del Estado. Realiza regularmente visitas no anunciadas a los lugares en que se encuentran personas privadas de su libertad, con el propósito de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.



Enfoque y metodología

Investigar para incidir

Desde una perspectiva comparada, el informe retoma y contrasta las problemáticas identificadas en el diagnóstico inicial del sistema de protección especial de INAU elaborado por el MNP, tras un período de diez años. Asimismo, el documento integra el intercambio realizado con los diferentes actores involucrados en la política de infancias y adolescencias en las regiones del país.

Para el monitoreo presencial se efectuaron visitas sin previo aviso a los centros de protección especial para observar los espacios residenciales, entrevistar al personal y a niñas, niños y adolescentes residentes en los centros, además de realizar una revisión documental, observación y registro fotográfico. Se visitaron 79 centros entre febrero de 2023 y junio de 2025, lo que significó una cobertura del 68% del universo de centros de protección especial del país.

Asimismo, se realizó un monitoreo a distancia que alcanzó al 86% de los centros de protección especial y permitió cuantificar algunas de las dimensiones relevadas en el monitoreo presencial.

Se presentaron a las autoridades nacionales y departamentales del INAU los informes regionales y el informe global preliminar. A su vez, se realizaron presentaciones territoriales (en Minas y Paysandú) con los referentes territoriales de los organismos públicos, la sociedad civil y adolescentes vinculados con las políticas de infancias y adolescencias a nivel territorial. Por último, se realizaron presentaciones a nivel nacional con los referentes de organismos públicos y adolescentes organizados.

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL?

En el sistema de protección especial se encuentran las niñas, niños y adolescentes que por orden judicial han sido separados de su familia, de forma transitoria o definitiva, por situaciones de vulneración de derechos. Esta medida de protección tiene la característica de ser de excepción, o sea, que es aplicada como la última opción. Asimismo, el ingreso a un centro de protección 24 horas siempre será con carácter transitorio, durará el menor tiempo posible, mientras la niña, niño o adolescente pueda ser reintegrado a un ámbito familiar, ya sea en su familia de origen u otra familia alternativa (Código de la Niñez y la Adolescencia, art. 120-8)



Principales hallazgos

Nudos críticos del sistema de protección

A continuación, se presentan las principales constataciones relevadas en el monitoreo del sistema de protección y se identifican aquellos elementos que tienen un carácter estructural y que se observan desde hace diez años, así como nuevas configuraciones que están en tensión.

¿La institucionalización como medida de protección?

Crecimiento constante y altos índices de institucionalización

Si bien Uruguay muestra un proceso de envejecimiento poblacional, con un descenso en la proporción de niñas, niños y adolescentes, las medidas de amparo aumentan de manera sostenida. A marzo del 2025, se encontraban en el sistema de protección 7.835 niñas, niños y adolescentes; de ese total, 3.224 residían en un centro de protección y 4.601 se encontraban en un contexto familiar (familia propia o ajena) con seguimiento de equipos técnicos. En los últimos años se ha mantenido incambiado el umbral de 3.000 niñas, niños y adolescentes que residen en centros de protección.

El ingreso al sistema de protección especial es una medida de excepción. Sin embargo, resultan llamativos los altos índices de institucionalización que se registran de forma sostenida en el Uruguay. Nuestro país presenta la tercera tasa más elevada de institucionalización de niñas, niños y adolescentes de América Latina (321 niñas, niños y adolescentes cada 100.000).²

Permanencias prolongadas

Existe consenso respecto a las consecuencias negativas que tienen los procesos de institucionalización de las infancias y adolescencias, y que en consecuencia debe tomarse como una medida de último recurso y por el menor tiempo posible. Sin embargo, se constata que el promedio de permanencia de una niña, niño o adolescente que ingresa al sistema de protección es de siete años, lo que significa mucho tiempo en la vida de las infancias y adolescencias.

Creer en instituciones como los centros de 24 horas tiene impactos perjudiciales a nivel psicológico, emocional y físico para las infancias y adolescencias, y genera trayectorias difíciles de desandar. Es

² UNICEF. (2024). La infancia como prioridad: seis desafíos claves de políticas públicas en Uruguay, p. 20.

imperioso fortalecer las estrategias de abordaje y acompañamiento comunitario y familiar, que permitan dotar de recursos a las familias y las comunidades para evitar la institucionalización de las infancias y adolescencias.

Infancias y adolescencias en riesgo

Se observa que las situaciones de las niñas, niños y adolescentes que ingresan al sistema de protección especial **dan cuenta de mayores niveles de daño (físico y emocional)**, debido a la exposición a reiteradas o permanentes situaciones de vulneración de derechos.

Los motivos que generan ingreso están asociados a la exposición a violencia, situaciones de abuso y explotación sexual, exposición a redes de venta y consumo de sustancias, además de entornos familiares con fragilidad en el ejercicio de sus funciones de cuidado.

Si bien se visualizó que los motivos de ingreso son similares a los registrados hace diez años, el nivel de daño se ha profundizado, así como hay problemas que han adquirido nuevas configuraciones. Uno de los fenómenos emergentes en los últimos años, que ha transformado significativamente el escenario, es el aumento de la **violencia territorial**. En este contexto, bandas y grupos vinculados a la criminalidad captan a niñas, niños y adolescentes antes, durante y después de su paso por el sistema de protección. Esta situación de extrema violencia impacta en las infancias y adolescencias que se encuentran en los centros de protección y los expone a situaciones de riesgo.

Si bien la acumulación de daño y vulneraciones en las trayectorias individuales e historias familiares de las niñas, niños y adolescentes constituye un motivo para enfatizar su necesidad de protección, estas mismas realidades generan en los diferentes organismos públicos actitudes y prácticas de discriminación de las niñas, niños y adolescentes.

Espacios que no son protectores

Capacidad sobrepasada, recursos limitados y condiciones materiales deterioradas

En el monitoreo a distancia, el 40% de los centros reportaron que en los últimos tres meses habían atendido más niñas, niños y adolescentes de lo que podían ocuparse según su capacidad. Se observaron colchones en el piso, niñas y niños durmiendo en sillones, o en camas en los espacios comunes. La capacidad de atención sobrepasada constituye en sí misma una condición que vulnera derechos y limita las posibilidades de brindar una respuesta adecuada y protectora.

En varios centros, los equipos plantearon **sobrecarga derivada de la multitarea** y la inexistencia de espacios y acciones de cuidado de equipo, lo cual se presentó de forma transversal en las distintas regiones. Por otro lado, continúa siendo un problema la escasa formación y

67%
de aumento
en los últimos
15 años de niñas,
niños y adolescentes
en el sistema
de protección

321
niñas, niños
y adolescentes
institucionalizados
cada 100.000

7 años
promedio
de permanencia
de niñas, niños
y adolescentes
en el sistema
de protección

capacidad para brindar una atención de calidad en parte del personal de atención directa de los centros. Se requiere que este cuente con **herramientas y habilidades socioemocionales** que actúen en el día a día para anticipar y dar respuestas que permitan garantizar los derechos de infancias y adolescencias. Esto repercute no solo en las condiciones en que se desarrollan las niñas, niños y adolescentes, sino también en la generación de estrategias que modifiquen sus trayectorias futuras.

Las **condiciones materiales**—y, en particular, edilicias— de los centros de protección constituyen una dimensión en la que se han registrado avances en distintos departamentos. No obstante, al mismo tiempo, se han percibido condiciones incambiadas en centros a los que se habían realizado recomendaciones previas, lo cual preocupa a la hora de evaluar la capacidad del sistema para incorporarlas. Si bien se argumenta en general que los procesos administrativos no acompañan las necesidades de los centros, la respuesta ha resultado insuficiente a la hora de pensar en escenarios que posibiliten el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

Tránsitos institucionales que no protegen

Ingresos que revictimizan

Las formas en que el sistema recibe a las niñas, niños y adolescentes definen uno de los momentos en que se tejen descuidos y violencias institucionales de carácter estructural que han resultado resistentes al tiempo y difíciles de desandar.

Desde hace diez años se constata que no existen líneas y pautas en relación con lo que se informa a las infancias y adolescencias en el momento que ingresan al sistema de protección. En líneas generales, no saben en qué consiste la medida de protección, no se les informan las estrategias posibles de abordaje, así como tampoco son esperados y recibidos en el centro al que llegan.

A partir del relato de las niñas, niños y adolescentes se relevó que habían conocido las instalaciones del centro, así como las reglas de funcionamiento, a través de otros pares que realizaban el recibimiento de manera espontánea. Esta situación les generaba sentimientos de soledad, desorientación y una percepción de falta de cuidado adecuado.

Al igual que se señaló hace diez años, «es importante insistir en la relevancia de la contención afectiva que se debe brindar al momento del ingreso, teniendo en cuenta el estrés y trauma que implica en general la separación familiar».³

«Cuando llegás no entendés nada. Hay que esperar a que alguien venga y te consuele, o te diga algo. Es el peor momento».
(Relato de adolescente)

«Es como caer presa. Caes con la muda de ropa y, con suerte, si te traen».
(Relato de niña)

3 Mecanismo Nacional de Prevención, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (MNP-INDDHH). (2015). Informe Diagnóstico global. Informe n.º 035/mnpsp/2015, p. 32.

Separación de hermanas/os y lógica del cupo

A esta situación de vulneración de derechos con la que se recibe a las infancias y adolescencias que requieren una medida de protección del Estado, se suma una organización institucional que prioriza la mirada organizacional y no la situación de cada niña, niño o adolescente que ingresa.

El monitoreo regional del MNP relevó que, en muchas ocasiones, cuando la capacidad de atención se ve saturada, se generan ingresos o derivaciones basados en la lógica de *cupos disponibles*. Tales resoluciones no responden a las características y necesidades de las niñas, niños y adolescentes atendidos, y en algunos casos involucran la separación de hermanos y traslados fuera de su lugar de origen, prácticas que ya se habían descrito en 2015.

Particularmente, respecto a la separación de hermanos, la organización del sistema basado en la diferenciación de edad como de género implica que cuando ingresa un grupo de hermanas/os, estos son separados según sexo y edad. En este sentido, son pocos los centros que albergan grupos de hermanos y, en general, no integran a hermanos/as adolescentes. Nuevamente, el sistema de protección vulnera los derechos de las infancias y adolescencias que requieren protección del Estado.

Trayectorias por varios centros y trueques

Se confirmó que desde 2010 las niñas, niños o adolescentes que están en el sistema de protección transitan en promedio por tres centros, y se han registrado situaciones en las que fueron trasladados por más de diez centros. Cada traslado implica un momento de estrés, un nuevo desarraigo y la imposición de conocer un nuevo espacio, otras reglas, otros equipos y otros pares. El traslado puede ser valorado como una estrategia de trabajo, pero el análisis cuantitativo da cuenta de una práctica de violencia institucional hacia las niñas, niños y adolescentes.

Se identificaron situaciones de traslados dentro de un mismo departamento e interdepartamentales en modalidad de *trueque*. Esta práctica implica un intercambio institucional que puede afectar la continuidad de los vínculos afectivos, así como un desarraigo de la familia o de las redes de referencia y comunitarias, lo que debería ser evaluado en función del interés superior del niño. En muchos de estos *trueques* se observaron dificultades de comunicación entre los equipos antes del traslado, lo que repercutió en tránsitos no protegidos para las niñas, niños y adolescentes.

3 centros
en promedio transitan
las niñas, niños
y adolescentes
en el sistema
de protección

¿Restitución de derechos?

Prácticas que profundizan el daño en la salud mental

La atención en salud mental constituye un nudo crítico no solo para el sistema de protección, sino también en términos generales. Sin embargo, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado, ello afecta de manera específica y refuerza las vulnerabilidades y vulneraciones.

La falta de dispositivos y profesionales para la atención integral en salud mental es un problema estructural del sistema de salud. Se informaron demoras en el acceso a valoración psicológica y psiquiátrica y tratamientos respectivos en los prestadores de salud. Se registraron casos de **esperas excesivas que alcanzaron hasta ocho meses para una primera consulta.**

Debe tenerse en cuenta que las niñas, niños y adolescentes que ingresan y transitan el sistema de protección especial tienen una historia signada por daños (como violencias y abusos), que es preciso atender de forma inmediata.

En el monitoreo a distancia se constató que el 56% de los centros de protección había tenido en el último mes una niña, niño o adolescente hospitalizada/o por razones de salud mental. En el 53% de los centros del país se registraron situaciones de intento de autoeliminación.

Tanto en Montevideo como en el interior del país, se observaron prolongadas esperas para el ingreso a centros de atención integral en salud mental (CAISM). **El 53% de los centros sostuvieron que estaban a la espera del traslado de al menos una niña, niño o adolescente a un centro especializado en salud mental o discapacidad.** En promedio, los centros deben esperar nueve meses para que se concrete el traslado solicitado, y en algunas situaciones se han superado los dieciocho meses.

Como se ha señalado, las niñas, niños y adolescentes que ingresan al sistema de protección suelen presentar significativos niveles de daño acumulado, producto de trayectorias vitales marcadas por múltiples vulneraciones. **En consecuencia, requieren una atención integral que incluya abordajes en salud mental personalizados, específicos, consistentes, sostenidos en el tiempo y en cercanía territorial. Estos abordajes deben superar una perspectiva meramente sanitarista y no pueden reducirse exclusivamente a intervenciones desde la psicología o la psiquiatría, atención que incluso es insuficiente.**

56%

de los centros había
tenido en el último
mes una niña, niño
o adolescente
hospitalizada/o
por situación de salud
mental

190

situaciones de intento
de autoeliminación,
en el último año

Trato estigmatizante en los centros educativos y dificultades para sostener trayectorias

Si bien se destaca un avance en el nivel de acceso de la población del sistema de protección especial a la educación formal y a propuestas de educación no formal, se verificaron prácticas estigmatizantes hacia niñas, niños y adolescentes en los centros educativos y escasas estrategias de los centros de protección y educativos para abordar la interrupción de las trayectorias educativas en la adolescencia.

Por un lado, en las distintas regiones se encontraron situaciones de trato estigmatizante de las instituciones educativas, algunas de las cuales se tradujeron en reducciones horarias para las niñas, niños y adolescentes por *desajuste* de la conducta esperada. Esto último se presentó de manera más pronunciada en escuelas especiales y constituye una preocupación para la garantía de derechos en el ámbito de la educación.

También se constató que algunos centros presentaban dificultades para garantizar la asistencia a centros educativos formales y no formales, principalmente en la adolescencia. Entre los factores que han incidido en esta problemática, los equipos mencionaron las situaciones de consumo problemático y padecimientos de salud mental que afectan directamente la posibilidad de sostener la asistencia a los centros educativos. Asimismo, se verificó en muchos casos la ausencia de estrategias institucionales para acompañar estas dificultades, tanto en los centros de protección como en los propios centros educativos.

«Antes tenía hora para levantarme porque iba al liceo, pero ahora no. Ahora no hago mucho».
(Relato de adolescente)

«La UTU no quiere que vaya y la sancionan con tres meses sin clase. Eso es vulnerar su derecho a la educación».

(Relato de directora de centro para adolescentes)

«No me gusta quedarme en el liceo, me siento que soy burra».

(Relato de adolescente)

Acceso a la justicia

Uno de las dificultades recurrentes en relación con el acceso a la justicia fue la referida a la demora en los tiempos de investigación y la resolución de condena a los responsables. En particular, en el caso de adolescentes que habían realizado denuncias en Fiscalía por explotación sexual, preocupa el eventual efecto disuasivo que estas demoras podrían tener en otras posibles denunciantes, así como la exposición y revictimización que generaron.

En distintos departamentos del país, los equipos identificaron dificultades en el acceso a la justicia relativas a la protección contra la violencia, en tres dimensiones:

- i) situaciones de *abuso y explotación sexual* que motivan el ingreso al sistema de protección de niñas, niños o adolescentes, que no se denunciaban o investigaban con posterioridad a la medida de protección para la imputación de los perpetradores, lo que además implicaba un nuevo riesgo.
- ii) situaciones de *revinculación familiar dispuestas judicialmente* cuando la niña, niño o adolescente estaba residiendo en un centro de protección, en donde sin consulta y de forma intempestiva

se disponía el retorno al entorno familiar. En estas situaciones, los equipos del sistema de protección valoraban que no estaban dadas las garantías mínimas para establecer dicha revinculación.

iii) vinculado con lo anterior, *egresos dispuestos judicialmente*, en relaciones de adolescentes con personas mayores (más de ocho años de diferencia) que fueron avaladas judicialmente como relaciones afectivas, contrario a lo que estipula la normativa (ley 9155 del Código Penal, artículo 272).

Respuestas acotadas ante situaciones de riesgo

Salidas no acordadas, con niveles de riesgo a la integridad física y psicológica

Según se estipula en el *Manual de procedimientos de INAU*, «una salida no autorizada (no acordada) refiere a la ausencia no consentida del lugar de residencia de un niño, niña o adolescente que se encuentra bajo la protección del INAU, tanto en sus modalidades de acogimiento residencial como en las modalidades de atención en contexto y acogimiento familiar».⁴

De acuerdo con el monitoreo que realizó el MNP, cuando una niña, niño o adolescente no regresa al centro a la hora estipulada, en la mayoría de los centros automáticamente se define que es una salida no acordada y se realiza una denuncia policial, sin una valoración previa de riesgos. Esta práctica no permite diferenciar entre adolescentes que están en salida no acordada pero que no se encuentran en una situación de riesgo, de quienes sí están expuestos a situaciones de violencias, abusos, captación de redes de explotación sexual, trata, narcotráfico u otros.

En el 73% de los centros se reportaron salidas no acordadas en los últimos seis meses; sin embargo, en algunos departamentos esto adquiere una dimensión particular, con niveles de riesgo de vulneración grave y dinámicas estructurales que es preciso problematizar y desactivar. Se han constatado situaciones de desaparición, denominadas *salidas no acordadas*, que se extendieron de seis meses hasta el año, constituyendo situaciones muy graves. Sumado a ello, entre los centros que reportaron que tenían al menos una niña, niño o adolescente en salida no acordada en el último mes, **en más de la mitad de estas situaciones no se tenía conocimiento del paradero de dicha persona, pero se consideraba que la niña, niño o adolescente se encontraba en riesgo.**

A la débil valoración de riesgo al momento de realizar una denuncia policial, se suma la ausencia de un accionar definido y articulado en-

«Si vieran cómo es vivir acá...Lo único que queda es fugarte».
(Relato de adolescente)

«Yo me fui unos días porque no bancaba más y no quería romper todo acá».
(Relato de adolescente)

4 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). (2019). Manual de procedimientos para el sistema de protección integral de 24 horas. Montevideo, p. 44.

35%

de los centros
registran niñas,
niños y adolescentes
que ingresaron
por situaciones
de explotación sexual

5%

niñas, niños
y adolescentes
ingresaron al sistema
de protección por
una situación
de explotación sexual

39%

de los centros
reportaron sospecha
de que las niñas, niños
y adolescentes
del centro se habían
vinculado a situaciones
de explotación sexual

tre los organismos públicos (Ministerio del Interior, Poder Judicial, INAU, Fiscalía) para realizar una búsqueda activa de la población infantil y adolescente que se encuentra desaparecida o en situación de riesgo. Asimismo, se constató que frente a estas situaciones de riesgo existen **escasas herramientas interinstitucionales para la protección de niñas, niños y adolescentes**. En algunos centros se habían desplegado estrategias que terminaron exponiendo a los equipos (exposición al realizar la denuncia, al ir a buscar a niñas, niños o adolescentes en espacios con riesgo, entre otros), sin rutas claras a nivel interinstitucional.

Las salidas no acordadas implican violencia institucional cuando no se busca a las niñas, niños y adolescentes, cuando se los culpabiliza, se los estigmatiza, y cuando su ausencia y desaparición temporal se naturaliza, pero resulta aun más grave cuando no se investiga, ni informa sobre sus posibles paraderos y estos implican serios riesgos para su integridad física y emocional.

Exposición a situaciones de explotación sexual y/o redes de trata y tráfico

La explotación sexual constituye un fenómeno que atraviesa el sistema de protección en los distintos territorios, aun cuando se identifican zonas donde ello adquiere una dimensión significativa. En algunos casos, la captación combina redes de explotación sexual y de microtráfico, sumando vulnerabilidades. En los departamentos de frontera y en ciudades turísticas se verificaron situaciones de abuso sexual, con graves omisiones del sistema de salud, judicial y de protección, al tiempo que resultaron insuficientes los mecanismos para la prevención, reparación y no repetición.

Más de un tercio de los centros (35%) registraron situaciones de explotación sexual como motivo de ingreso al sistema de protección. Esto representa el 5% de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban en los centros de protección. A esto se suma que el 39% de los centros reportaron sospecha de que las niñas, niños o adolescentes del centro se habían vinculado a situaciones de explotación sexual o trata.

En este sentido, una de las dinámicas que se relevó guarda relación con la captación de adolescentes luego de su ingreso al sistema de protección. En muchas situaciones, esta captación se dio por parte de otras/os adolescentes —también víctimas— que estaban en el sistema de protección o habían egresado de este, y eran utilizadas/os por las redes de explotación para tales fines.

El MNP observa con preocupación las visiones que surgen desde algunos equipos del sistema de protección respecto a este tema y, en particular, cómo se ubica a las adolescentes que son captadas por las redes de explotación. Se identifica una falta de visualización de estas adolescentes como víctimas y la naturalización de la vinculación de las adolescentes con adultos. Algunos informes técnicos y documentación revisada dan cuenta de perspectivas culpabilizantes y punitivistas hacia las adolescentes.

Egresos frágiles

Lograr condiciones protectoras de egreso de niñas, niños y adolescentes es un desafío estructural del sistema de protección.

Se observaron situaciones en las que el egreso con referentes afectivos de las niñas, niños y adolescentes se daba por un tiempo limitado, pues no se garantizaba la protección integral, y ello implicaba reiterados reingresos al sistema de protección. La falta de seguimiento en estos procesos ha sido persistente y se ha agravado. En muchos casos, tienen lugar de maneras no garantistas, enunciados como reintegros forzados por los propios equipos técnicos. Este fenómeno constituye una forma de violencia institucional, que se efectiviza por la falta de capacidad del sistema para cuidar y acompañar.

Aparecen, también, como proyectos inmediatos para el egreso al cumplir la mayoría de edad, la posibilidad de que las o los adolescentes se incorporen a un refugio del Ministerio de Desarrollo (MIDES). Esta respuesta es inadmisibles como proyecto desde la perspectiva de los derechos y el desarrollo integral.

Preocupa especialmente que se visualicen los vínculos de pareja de las y los adolescentes como un posible proyecto de egreso y una alternativa de protección de derechos. Este tipo de situaciones constituyen arreglos que —dada la etapa vital y condiciones en las que se construyen— pueden ser frágiles, así como implicar nuevas vulneraciones por mediar un vínculo de relación de dependencia.

En situaciones en que las estrategias de egreso no se pueden concretar a través de la revinculación familiar o adopción, se debería procurar un proyecto de autonomía a favor de la emancipación de las y los adolescentes. Sin embargo, se constataron proyectos de autonomía débiles, sin condiciones materiales (oportunidades laborales, acceso a vivienda, entre otros) y afectivas que permitan la sustentabilidad.



Desafíos para el sistema de protección integral de las infancias y adolescencias

El principal desafío es construir un sistema de protección que efectivamente proteja a las niñas, niños y adolescentes atendidos, que tenga la capacidad para interrumpir las vulneraciones que originan su ingreso y que, al mismo tiempo, repare el daño, restituya derechos y favorezca las condiciones para que puedan desarrollarse integralmente en el menor tiempo posible.

Demanda creciente, abordajes deficientes y egresos no garantistas.

La situación social actual del país ha generado una creciente fragilidad en los recursos de las comunidades y familias para brindar entornos de cuidado a las niñas, niños y adolescentes que, en su expresión de mayor vulnerabilidad, devienen en ingresos al sistema de protección especial del INAU. Se requiere de respuestas de política pública acordes a las actuales configuraciones de riesgos, con protocolos claros para su funcionamiento entre las instituciones, así como compromiso político firme para abordarlos, con las consecuentes medidas y recursos.

Resulta urgente que las instituciones dedicadas a la protección de las infancias y adolescencias desplieguen acciones preventivas para evitar la institucionalización, fortalezcan las capacidades de cuidado de las familias y adultos referentes y generen alternativas de cuidado familiar que resguarden el derecho a vivir en familia.

Salud mental y consumo problemático de sustancias.

La problemática de salud mental es un desafío de larga data en el país, en especial, en el cuidado de la salud mental de las infancias y adolescencias. En el caso del sistema de protección, la vulneración no solo está dada por la limitación o falta de acceso, sino también por las dificultades para abordar las manifestaciones emocionales de las niñas, niños y adolescentes producto de la acumulación de vulneraciones en sus biografías. Es necesario trascender las propuestas tradicionales y sanitarias en lo que refiere a salud mental, para abordar también sus determinantes sociales, junto con un enfoque reparatorio de los daños. El Estado mantiene el desafío referido a la reparación de trayectorias vitales que se han construido en torno a múltiples vulneraciones de derechos.

Por otro lado, el consumo de sustancias aparece como una problemática que ha avanzado en su presencia en las trayectorias individuales y familiares, y las propuestas disponibles son escasas y no se adecuan a las características y dinámicas que estos consumos presentan en las trayectorias de niñas, niños y adolescentes.

Infancias y adolescencias expuestas a riesgos.

Es urgente realizar un análisis de los niveles de riesgo al que están expuestas las infancias y adolescencias y ajustar las acciones interinstitucionales en función de estos. Específicamente, en aquellas salidas no acordadas que se prolongan en el tiempo, se requiere una mirada particular, en tanto constituyen una omisión del Estado en la protección. Es imprescindible fortalecer los mecanismos institucionales y la articulación interinstitucional con el sistema de respuesta a la violencia para coordinar estrategias de prevención y protección.